

República de Colombia



Rama Judicial
Distrito Judicial del Caquetá
Juzgado Primero Penal Municipal
Florencia

ACCIÓN DE TUTELA

Actor: JOSÉ RAMIRO VIRGUEZ BENITEZ

Contra: MEDIMAS EPS – MEDISFARMA FLORENCIA, MEDICED PRADO, HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Radicación: 1800140040012021-00161

AUTO INTERLOCUTORIO No. 258

Florencia, veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

JOSÉ RAMIRO VIRGUEZ BENITEZ interpone acción de tutela con el fin de que le sean amparados los derechos fundamentales a salud, la vida, dignidad humana, tratamiento integral presuntamente vulnerados por MEDIMAS EPS – MEDISFARMA FLORENCIA, MEDICED PRADO, HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

Como quiera que con la decisión que se pueda tomar en este asunto se pueden ver afectados los derechos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud ADRES, se hace necesaria su vinculación a la tutela a través del representante y/o quien haga sus veces.

Revisada la solicitud de tutela y por reunir los requisitos exigidos en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, y en obediencia a lo dispuesto en el artículo 19 *Ibidem*, se admitirá la presente acción.

En cuanto a la medida provisional deprecada a favor de JOSE RAMIRO VIRGUEZ BENITEZ, mediante la cual solicita: *Se ordene a la “EPS MEDIMAS, la entrega de los medicamentos SITAGLIPINA + METFORMINA 50/1000 PAG, que requiero tomar a diario con el fin de mejorar mi estado de salud, y en consecuencia evitar desmejorar mi diario vivir.”*

Se tiene que para la procedencia de esta medida debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 y los pronunciamientos de la Corte Constitucional como en sentencia T-258 de 2013 con magistrado ponente Alberto Rojas Ríos que en uno de sus apartes señaló que:

“(…) La Corte Constitucional ha precisado que procede el decreto de medidas provisionales frente a las siguientes hipótesis: (i) cuando éstas resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración

o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea imperioso precaver su agravación.

Así mismo el artículo 7º del mencionado Decreto preceptúa: “Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. (...)”

En este sentido, debe decirse por esta instancia judicial que no se avizora una amenaza o riesgo eminente, que implique la protección inmediata de los derechos presuntamente conculcados al señor JOSÉ RAMIRO VIRGUEZ BENITEZ, toda vez que, no se puede dar anticipadamente una orden de medida provisional, resolviendo el asunto objeto de discusión, sin dar cumplimiento al debido proceso, pues no se hace urgente la excepcional intervención inmediata del juez constitucional, debe respetarse el derecho de defensa y contradicción de quienes tienen intereses y el despacho decidirá la presente acción de tutela dentro del término de diez días hábiles siguientes a la recepción de la misma.

En vista de lo anterior, el suscrito Juez

DISPONE:

PRIMERO: Admítase a trámite la acción de tutela propuesta por JOSÉ RAMIRO VIRGUEZ BENITEZ en contra de MEDIMAS EPS – MEDISFARMA FLORENCIA, MEDICED PRADO, HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

SEGUNDO: VINCULAR a la presente acción de tutela a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES -, como quiera que con la decisión que se pueda tomar en este asunto se pueden ver afectados sus derechos, por tanto, se hace necesaria su vinculación a la tutela a través del representante y/o quien haga sus veces.

TERCERO: En consecuencia, notifíquese a los accionados y entidad vinculada, remítasele copia del libelo de tutela para que se pronuncien sobre los hechos y pretensiones contenidos en ella, dentro de un (01) día siguiente al recibo de la comunicación, allegue escritos, documentos o copias de las piezas que estime pertinentes para responder a las afirmaciones que se hacen en la petición introductoria.

CUARTO: NEGAR la medida provisional a favor de la señora JOSE RAMIRO VIRGUEZ BENITEZ, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito conforme el art. 16 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' and 'E' followed by a cursive 'SOTO'.

FREDDY ESPINDOLA SOTO
JUEZ PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE FLORENCIA